

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**



JUZGADO NOVENO DE FAMILIA BOGOTÁ D.C. EN ORALIDAD

Bogotá D.C., 27 de marzo de 2023

Referencia: Medida de protección

Radicación: 2022-00701

Procede el Despacho a resolver grado jurisdiccional de consulta dentro del presente proceso de Medida de Protección proveniente de la Comisaría Diecinueve de Familia de Ciudad Bolívar I.

ANTECEDENTES

La señora JULIETH NIETO HERNANDEZ presentó solicitud de medida de protección contra JEFERSON STEVEN PATIÑO VILLABONA, denunciando hechos de violencia intrafamiliar, donde luego de agotado el procedimiento de Ley se profirió fallo imponiendo medida de protección definitiva en su favor y contra del JEFERSON STEVEN PATIÑO VILLALOB, advirtiendo a la accionada sobre las sanciones en caso de incumplimiento a la medida de protección impuesta.

La señora JULIETH NIETO HERNANDEZ presentó solicitud de incumplimiento a lo ordenado en la medida de protección No. 1182-2020, refiriendo que *“el 11 de agosto a las 5:30 am, mi excompañero Jefferson Steven Patiño en vía pública nos agredió verbalmente a mí y mi hija (...);* hechos estos que el incidentante considera como incumplimiento a la medida de protección impuesta, frente a lo cual el aquo mediante proveído de la misma fecha admitió y avocó el trámite de incidente de incumplimiento solicitado, ordenando citar a las partes, señalando fecha para que comparecieran a fin de llevar a cabo la audiencia prevista en el artículo 17 de la ley 294 de 1996.

La Comisaría Diecinueve de Familia de Ciudad Bolívar I, mediante providencia emitida el día 27 de septiembre de 2022 profirió decisión dentro del incidente a la medida de protección de la referencia mediante la cual sancionó a JEFFERSON STEVEN PATIÑO VILLABONA con multa de DOS (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

CONSIDERACIONES

Como se puede observar, el proceso se tramitó bajo los parámetros establecidos en la Ley 294 de 1996, modificada por la ley 575 de 2000, sin que se aprecie por parte del Juzgado causal de nulidad que invalide lo actuado.

El presente trámite tiene por objeto verificar si el señor JEFERSON STEVEN PATIÑO VILLABONA ha cumplido con las órdenes impartidas por la Comisaría o si por el contrario se ha hecho merecedor de las sanciones impuestas en providencia que se consulta por haber incurrido en desacato.

El análisis de los hechos expuestos en la solicitud con las pruebas recaudadas debe crear la convicción de quien se predica ha incumplido la medida de protección para finalizar con las decisiones tomadas en la providencia que se consulta.

Para resolver el tema se debe tener en cuenta que los actos de violencia se presentan en dos formas, el primero de ellos mediante el maltrato físico, *“cuando se ocasionan lesiones en el cuerpo, por medio de: golpes, quemaduras, estrangulamiento, entre otros; produciendo fracturas, lesiones temporales o definitivas, llegando en algunos casos hasta la muerte”^[1]*, y, el segundo se manifiesta a razón del maltrato psicológico con *“actitudes de desprecio, control, burla, vigilancia de los actos del otro y la toma de decisiones importantes sin consultar a la familia”^[2]*; los cuales, *“entendida su acepción más amplia, incluye todo género de acciones que afectan la dignidad humana de la víctima en todas y cada una de sus concreciones: respeto a la vida, integridad física y moral, libertad de locomoción y armonía síquica y emocional”^[3]*.

Igualmente, *“el maltrato comprende mucho más que el simple ejercicio de la violencia, aunque este aspecto será el más socorrido que el simple ejercicio en el orden efectual–probatorio, alcanzando toda una gama de comportamientos que denigran, desedifican, menosprecian, humillan, coartan o, sencillamente neutralizan el adecuado y libre desarrollo de la personalidad de la víctima, en el ámbito intrafamiliar”^[4]*

Dentro del presente asunto se recaudó el siguiente material probatorio: *

- Ratificación de los hechos denunciados por la incidentante.
- El incidentado, quien no compareció a la audiencia a rendir los descargos, ni presentó excusa por su inasistencia, lo que a voces del art. 15 de la Ley 294 de 1996, modificado por el art. 9º de la ley 575 de 2000 hace presumir que acepta los cargos formulados en su contra.
- Informe de entrevista psicológica realizada a la menor NICOLLE SAMANTA PATIÑO NIETO (6 años) quien hizo mención sobre el conflicto entre sus progenitores, aunque no manifestó de manera clara agresiones por parte de su progenitor hacia su progenitora motivo de la entrevista, sin embargo, manifestó agresiones de orden físico sin evocar fechas, evidenciando por parte del profesional que realizó la entrevista, una alienación parental por lo que determinó que no resultaba conveniente adoptar la entrevista como medio para las acciones según marco de ley.

No obstante lo indicado por el psicólogo que realizó la entrevista de la menor, el despacho tiene en cuenta lo manifestado por la menor *“un día mi mamá me iba a llevar a la señora que me cuida, ella salió y después de llegar arriba de la casa nos*

encontramos con mi papá, llegamos a la estación donde ella guarda la moto, llegamos con mi papá y mi mamá me llevaron donde me cuida la señora los vio y bajó y yo no me quería ir porque sabía que mi papá le iba a hacer algo terrible a mi mamá y lo hizo porque le botó la moto a mi mamá.”, hechos que si bien la menor no indica la fecha de su ocurrencia al parecer se relaciona con los hechos denunciados por la incidentante.

Así las cosas, conforme lo anotado respecto de los hechos que dieron origen a este incumplimiento, la prueba recaudada en el trámite del incidente y la no comparecencia del incidentado pese a encontrarse debidamente notificada de la fecha y hora en que debía comparecer a rendir sus descargos, lo que de conformidad con la norma en cita, se entiende como aceptación de los cargos formulados en su contra, se logra establecer que efectivamente el accionado no ha dado cumplimiento a las órdenes impartidas.

Frente al monto de la multa impuesta al accionado, esta se encuentra dentro de los parámetros establecidos por la ley, en consecuencia, su tasación resulta pertinente.

Sobre el pronunciamiento oficioso que debe hacer el despacho, en cuanto a la PERSPECTIVA DE GENERO, debemos remitirnos en primer lugar a Ley 294 de 1996, por la cual se desarrolla el artículo 42 de la Constitución Política y se dictan normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar.

En efecto, en dicha ley se identificaron los principios que toda autoridad pública debe seguir al momento de evaluar un caso de violencia intrafamiliar, de los cuales se destacan, a) la primacía de los derechos fundamentales y el reconocimiento de la familia como institución básica de la sociedad; b) que toda forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y por lo tanto, será prevenida, corregida y sancionada por las autoridades públicas; c) **la igualdad de derechos y oportunidades del hombre y la mujer**; entre otros.

Asimismo, dicha normativa estableció varias medidas de protección, el procedimiento a seguir cuando ocurren actos de violencia y las formas de asistencia a víctimas del maltrato intrafamiliar.

La actora inició una acción de protección por violencia intrafamiliar en contra de su esposo por los actos de violencia física cometidos en su contra.

La violencia doméstica o intrafamiliar y psicológica de la mano con la perspectiva de género, así como la naturaleza y alcance del interés superior de los niños.

La Ley 1098/2006 expresa que “*se entiende por **perspectiva de género** el reconocimiento de las diferencias sociales, biológicas y psicológicas en las relaciones entre las personas según el sexo, la edad, la etnia y el rol que desempeñan en la familia y en el grupo social.*”

Así las cosas, la perspectiva de género consiste en la necesidad de reconocer, cuando ello sea relevante, la asimetría que puede existir entre un hombre y una mujer, debido a una relación de poder. Ello se traduce en la obligación del Estado de diseñar e implementar políticas públicas que incluyan acciones afirmativas para superar la

discriminación. Tal concepto encuentra apoyo en los artículos [13](#), [42](#), [43](#), entre otros, de la Carta Política y en los instrumentos internacionales.

En este estado de cosas, la administración de justicia tiene el deber de cumplir sus funciones a la luz de la perspectiva de género, en aquellos casos que se denuncie violencia sexual o intrafamiliar. A partir de lo anterior, existe entonces un deber constitucional bajo su cargo cuando se enfrenten con situaciones fácticas de estas características. Por esa razón, entonces, es obligatorio que incorporen criterios de género al solucionar sus casos. En consecuencia, cuando menos, deben analizar los hechos y las normas con base en interpretaciones sistemáticas de la realidad, de manera que se reconozca que un grupo tradicionalmente discriminado por virtud de las relaciones de poder, afectan su dignidad y autonomía.

En el caso objeto de estudio, se tiene que la querellante corresponde a una persona del género femenino, frente a los agravios de carácter físico y de género del que ha sido víctima por parte de su esposo, que corresponde a violencia intrafamiliar contemplada en las leyes tantas veces mencionadas.

A instancias gubernamentales y jurídicas, en cuanto a la igualdad de derechos y oportunidades del hombre y la mujer, de conformidad con las instancias gubernamentales y jurídicas, como la equidad en el empleo, trabajo, salario, sin dejar a un lado, lo dispuesto en los tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer – CEDAW.

De igual manera, no puede pasar por alto el Despacho, que las circunstancias que rodean el presente asunto, por razones relacionadas con la perspectiva de género o cualquier otra circunstancia, deban desconocerse por el hecho de que la VICTIMA sea una mujer, pues precisamente el artículo 4 de la Ley 294 de 1996 (modificado por el artículo [16](#) de la Ley 1257 de 2008) ha señalado que toda persona que dentro de su contexto familiar sea víctima de daño físico, psíquico, o daño a su integridad sexual, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión por parte de otro miembro del grupo familiar, pueda pedir al comisario de familia del lugar donde ocurrieren los hechos y a falta de este al Juez Civil Municipal o Promiscuo Municipal, una medida de protección inmediata que ponga fin a la violencia, maltrato o agresión o evite que esta se realice cuando fuere inminente.

^[1] Feminismos liberales, radicales, culturales, socialistas, críticos, latinoamericanos, entre otros.

^[2] M. P. Alejandro Martínez Caballero.

^[3] "Naciones Unidas. Consejo Económico y Social. Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer. Documento E/CN.4/1996/53 Párrafo No 48."

^[4] Según el artículo 3º de la Ley 2157 de 2008, el daño psicológico es el "proveniente de la acción u omisión destinada a degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras personas, por medio de intimidación, manipulación, amenaza, directa o indirecta, humillación, aislamiento o cualquier otra conducta que implique un perjuicio en la salud psicológica, la autodeterminación o el desarrollo personal."

^[5] Dentro del cual se incluyen varias investigaciones realizadas en algunos países seleccionados como Brasil, Perú, Montenegro, República Unida de Tanzania y Japón, entre otros.

^[6] OMS, Informe Estudio multipaís de la OMS sobre salud de la mujer y violencia doméstica contra la mujer, 2005. Pág. 10.

^[7] Según el informe: "En todos los países objeto del Estudio, entre el 20% y el 75% de las mujeres había experimentado, como mínimo, uno de estos actos, en su mayoría en los últimos 12 meses previos a la entrevista. **Los que más se mencionaron fueron los insultos, la humillación y la intimidación.** Las amenazas con daños físicos fueron menos frecuentes, aunque casi una de cada cuatro mujeres en los entornos provinciales de Brasil y Perú declaró que había sido amenazada. Entre las mujeres que informaron haber sido objeto de este tipo de violencia, al menos dos tercios había sufrido la experiencia en más de una ocasión." Pág. 10.

^[8] OMS, Informe Estudio multipaís de la OMS sobre salud de la mujer y violencia doméstica contra la mujer, 2005. Pág. 22 y 23.

Por ser estos hechos de maltrato realizados en contra de la señora JULIETH NIETO HERNANDEZ, graves para la sana convivencia de la familia y del buen trato entre los miembros de la misma, atendiendo a los criterios de gravedad de la conducta los hechos y la necesidad de prevenir nuevos comportamientos como el aquí descrito, indefectiblemente se abre paso el correctivo impuesto por el a-quo contra el señor JEFERSON STEVEN PATIÑO VILLABONA, ante la reiteración de hechos constitutivos de violencia intrafamiliar contra la ofendida.

Por lo expuesto anteriormente, considera este despacho la existencia de elementos suficientes para confirmar la medida de protección tomada y la sanción impuesta al señor JEFERSON STEVEN PATIÑO VILLABONA, razón por la cual se confirmará la providencia objeto de consulta.

En mérito de lo expuesto el Juzgado Noveno de Familia de Bogotá D. C., administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido el 27 de septiembre de 2022 por la Comisaría Diecinueve de familia ciudad Bolívar I, en lo pertinente a la sanción por incumplimiento de la Medida de Protección No. 1182-2020.

SEGUNDO: ORDENAR devolver el proceso a la Comisaría de conocimiento, previas las anotaciones del caso.

NOTIFÍQUESE



CESAR ENRIQUE OSORIO ORTIZ
JUEZ

VPR / ER

JUZGADO NOVENO (9) DE FAMILIA DE BOGOTÁ
NOTIFICACIÓN POR ESTADO – SECRETARÍA
Bogotá D.C., **28 de Marzo de 2023**
El auto anterior queda notificado a las partes por
anotación en el ESTADO No. 50
ALISSON SANTAMARÍA CÁRDENAS
Secretaría

^[1] www.esecarisma.gov.co/paginas/principal/violencia_intrafamiliar.html

^[2] www.esecarisma.gov.co/paginas/principal/violencia_intrafamiliar.html

[\[3\]](#) Pedro Alfonso Pabón Parra. Comentarios al nuevo Código Penal Sustancial. Ediciones Doctrina y Ley Ltda.. Pág. 351.

[\[4\]](#) Pedro Alfonso Pabón Parra. Comentarios al nuevo Código Penal Sustancial. Ediciones Doctrina y Ley Ltda.. Pág. 351